

FILANTROPÍA SELECTIVA: CUANDO LA CARIDAD REFUERZA EL PRIVILEGIO

Por: Carlos Eduardo Naranjo Flórez – Abogado, profesor Universitario.

En días recientes hemos sido testigos de una agresiva campaña de recaudación de fondos dirigida al sector empresarial y a donantes particulares. El objetivo, noble en apariencia, es financiar becas para estudiantes de escasos recursos y el éxito de la campaña ameritó que en periódico de mayor circulación del país, El Tiempo (Ed. 28/12/2025, pag. 1.13), los donantes y la principal U. beneficiada, se congratularán de haber obtenido más de 673.156 donantes y \$11.111.461.382 millones. El apoyo de tal cantidad de donantes y de algunos importantes grupos económicos, incluyendo al grupo Aval, Caracol/Wradio, La Olímpica y otros, permitió ese éxito. Sin embargo, los donantes no tuvieron elementos críticos que permitían deducir que, si bien la campaña tendrá un número de beneficiados importante (1.200), lo que hacían era enviar un mensaje de exclusión a millones de Colombianos, generando con este tipo de campañas exclusivistas y de un perfil asistencialista, un gran daño, no solo a nivel reputacional para los donantes, sino para el sistema en general del servicio de educación, amen de problemas éticos también que se pudieren generar por las comisiones otorgadas a los medios de comunicación o terceros, para la prosperidad de la campaña. El destino de estos fondos revela una grieta profunda en nuestra comprensión de la equidad: la inyección masiva de capital no va al sistema público desfinanciado, ni a las universidades regionales que luchan por sobrevivir, ni a universidades de calidad que atienden perfiles de estrados medio, sino a las instituciones con gran mayor patrimonio y elitistas del país, privilegiando a la hermana mayor: la Universidad de los Andes.

Esta cruzada filantrópica, lejos de ser una solución estructural a la desigualdad, es un síntoma de ella. Al concentrar el apoyo del sector privado en una principal institución de élite, se validan premisas peligrosas que vulneran el tejido social y educativo de Colombia bajo cuatro aristas críticas.

En primer lugar, esta dinámica genera un **desplazamiento institucional**. Al canalizar la "responsabilidad social empresarial", sin canales democráticos y sin posibilidad de permitir competir a "los otros", hacia un solo actor hegemónico, se asfixia la posibilidad de democratizar la filantropía. Existen decenas de universidades privadas de alta calidad y vocación social que quedan excluidas del radar de los grandes donantes. Se crea un "Efecto Mateo": al que más tiene, más se le dará. La universidad o las universidades que ya cobran las matrículas más altas y posee el *endowment* (fondo patrimonial) más robusto, es paradójicamente la que absorbe los recursos solidarios, centralizando el prestigio y el capital. Ya el reconocido economista Thomas Piketty, al estudiar este tipo de sistemas "los *endowments* (fondos de donaciones) de las universidades de élite, observó con suficiente data que perpetúan la desigualdad, en lugar de corregirla. ("El Capital en el Siglo XXI" (2013), Capítulo 12, titulado "La desigualdad mundial de la riqueza en el siglo XXI")

En segundo lugar, la campaña perpetúa un **centralismo asfixiante**. Colombia no es Bogotá. Al concentrar los recursos en las capitales importantes, en proporciones que desconocemos (Los Andes por Bogotá, Eafit por Medellín, Icesi por Cali, Unab por Bucaramanga, y U.

Tecnológica de Bolívar por Cartagena) se obliga al talento regional a migrar para ser "salvado", validando la idea de que el éxito solo es posible en el centro y bajo el sello de una marca específica. Las universidades regionales (públicas y privadas), que son motores de desarrollo local en el Chocó, La Guajira o el Cauca, ven cómo los capitales que podrían fortalecer sus infraestructuras, que son las que más necesitan capacitar a su gente y ofrecer polos de desarrollo, se “fugan” de la región, profundizando la brecha entre centro y periferia. Sobre estos dos primeros puntos, ya el sociólogo **Mauricio García Villegas en Colombia** en sus textos sobre el "Apartheid educativo", explicaba cómo la educación en Colombia separa a las clases sociales en lugar de unir las.

Tercero, y quizás lo más grave, es la **tercerización de la responsabilidad pública**. El asistencialismo hacia una universidad privada de élite distorsiona la misión de la educación superior. Cada peso donado para becar a un estudiante en un entorno donde la matrícula cuesta al año 10 a 30 veces el salario mínimo legal, podría financiar diez veces más a estudiantes en la universidad pública o equivalente en las universidades privadas de la periferia. No se trata de negar oportunidades individuales, sino de cuestionar la eficiencia social de la inversión. Fortalecer lo privado con la excusa de la pobreza, debilita el argumento ético de que la educación pública debe ser la verdadera igualadora social.

Cuarto, finalmente el modelo desnuda una falencia en nuestra política fiscal y educativa. En lugar de campañas mediáticas de caridad selectiva, Colombia debería abogar por un sistema de beneficios tributarios transversales que premie el apoyo a la educación como sector, esto es, “importar” en forma adaptada a la problemática interna, los modelos exitosos que ya existen en muchos países, comenzando por EEUU. La experiencia internacional demuestra que el incentivo legislativo es clave. Mientras Francia impulsó la inversión privada en cultura y ciencia mediante la 'Loi Aillagon' (2003) y España consolidó su modelo de mecenazgo con la Ley 49/2002, en Latinoamérica, países como Brasil con la Ley “Lei do Bem” N° 11.196 de 2005) y Chile con las Ley No.18.581/1987 (Universidades) y Ley N° 19.247/1993 (Colegios) Ley 19.247 son faros a estudiar amen de decenas más. Con ello han logrado integrar al sector privado como un motor activo de la financiación educativa. En Colombia dicha reforma al sistema tributario debe hacerse con pinzas, por cuanto el sistema actual perverso de acreditaciones de universidades de baja calidad, incluso sin infraestructura, unidas al poder político regional y nacional, que ha sido patrocinado por el Estado en los últimos decenios ante las carencias del sistema educativo público, con ausencia o negligencia de control público al modelo mixto, determina que el problema va más allá de los meros incentivos, pero este tema bien complejo será motivo de otro análisis.

En conclusión, la filantropía no debería ser un mecanismo para lavar conciencias mediante la selección de unos pocos "becarios modelo" que se adapten a la élite, sino un concepto de política social y de desarrollo para quebrar brechas, mejorar la condición de las regiones olvidadas y aumentar el nivel general del sistema educativo.

Bogotá, enero 30 de 2.026.